

AGENDA GLOBAL

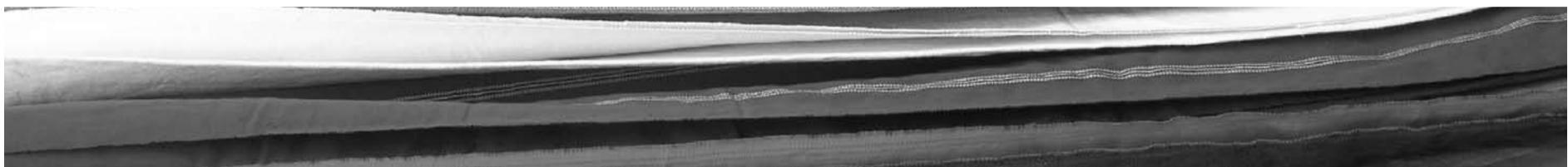
Montevideo Uruguay - Jueves 10 de junio de 2010 - N° 153 - Distribuido con la diaria



TWN

Third World Network

- ¿Hacia la legalización regulada de las drogas?
- Algodón sigue atascado en la OMC
- Clima: avances en Bonn



Los trabajadores de Honda Lock, una fábrica de cerraduras para automóviles en la provincia china de Guangdong, se declararon en huelga el miércoles 9 de junio, desencadenando el tercer paro en las líneas de producción de la transnacional automotora japonesa en menos de un mes. Hace pocos días, una huelga de dos semanas en otra subsidiaria de Honda en el sur de China terminó con aumentos de sueldo de entre veinticinco y treinta por ciento, y los obreros de Honda Lock quieren el mismo beneficio.

El éxito de los trabajadores de Honda ha tenido un efecto de avalancha, multiplicado por el uso de Internet y mensajes telefónicos. El domingo 6, quinientos trabajadores de Merry Electronics, una empresa taiwanesa, abandonaron sus puestos de trabajo y lograron en el mismo día un aumento de sueldos de veintidós por ciento. En Kunshan, sin embargo, mil trabajadores en huelga de la también taiwanesa KOK Machinery Co. fueron reprimidos el lunes 7 y se produjeron enfrentamientos callejeros entre la policía y los obreros. En las cercanías de la Feria Universal de Shangai, la policía tomó medidas extraordinarias para impedir que la ola de huelgas y protestas afectara esta nueva vitrina con la que China quiere mostrar su mejor cara a los ojos del mundo.

Si bien las huelgas "salvajes", es decir, no auspiciadas por los sindicatos oficiales, vinculados al Partido Comunista en el poder, no son bien vistas por las autoridades, a diferencia de lo que sucedía en un pasado reciente, la prensa china e internacional las está cubriendo sin censura alguna y la esporádica represión policial contra manifestaciones callejeras es explicada como "contención de desbordes" y no se traduce en persecución a los organizadores ni en criminalización de las huelgas en sí mismas.

Lee Chang-Hee, especialista en relaciones industriales y

Trabajo chino

Roberto Bissio

diálogo social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sostuvo en entrevista con la cadena de televisión Al-Jazzera que "se podría haber esperado mayor dureza en la respuesta gubernamental, pero las autoridades ahora están preocupadas con la redistribución. Si no hay mayores sueldos para los trabajadores, no es sustentable el modelo de desarrollo económico en China".

Así, por ejemplo, la semana pasada los sindicatos oficialistas de Shenyang negociaron, sin huelga, un aumento de treinta por ciento para los trabajadores de la cadena de comida rápida norteamericana KFC y en Beijing, el gobierno municipal anunció el jueves 3 un aumento de veinte por ciento en sus sueldos mínimos, que pasarán a ciento cuarenta dólares mensuales.

SI NO HAY MAYORES
SUEDOS PARA LOS
TRABAJADORES, NO ES
SUSTENTABLE EL MODELO
DE DESARROLLO EN CHINA.

Los medios empresariales ya están debatiendo si la tendencia al encarecimiento de la mano de obra china es irreversible y si los costos se trasladarán al consumidor o deberán deducirse de sus ganancias.

La agencia Reuters compara lo que está ocurriendo en China con la decisión tomada por Henry Ford en 1914 de pagar el doble de salarios que su competencia, con el argumento de que así aumentaría

la productividad y, además, habría compradores para sus automóviles. Si esto es así, el Ford chino se llama Terry Gou, fundador y presidente de Foxconn, una empresa taiwanesa que produce componentes electrónicos para Apple, Hewlett-Packard y Dell y está en la mira de organizaciones de derechos humanos y sindicales desde hace un tiempo por pagar sueldos de hambre y obligar a larguísimas jornadas de trabajo a su medio millón de trabajadores chinos en Shenzhen, frente a Hong Kong.

Desde enero de este año, una decena de trabajadores jóvenes de Foxconn se suicidó saltando en la madrugada desde las ventanas de los edificios de dormitorios colectivos de la empresa. "Si un trabajador en Taiwan se suicida por problemas emocionales, su empleador no será responsabilizado", se defiende Gou, "pero en China somos parte del problema, porque los obreros viven y duermen en nuestras propiedades".

Gou explicó cómo en los años ochenta su empresa construyó una ciudad entera de la nada... "Pero es hora de que el gobierno se encargue de los temas sociales". Foxconn se quedará con la fábrica y cederá los dormitorios al Estado, pagando el alquiler de sus trabajadores cuando sea necesario.

Pero el cambio va más allá, y Gou anunció aumentos graduales de salarios, que llevará a duplicarlos en octubre. Los trescientos dólares mensuales de Foxconn son tan escandalosos como los jornales de cinco dólares de Ford en 1914. Ante sus accionistas inquietos, Gou explicó: "Nos movemos un poco más rápido que los demás", pero el ajuste a un ambiente de salarios crecientes

en China será "de una velocidad y ferocidad mayor de la que nadie se imagina".

Para el gobierno chino, los aumentos de salarios son un mecanismo bienvenido para reducir las desigualdades y estimular el mercado interno, en momentos en que las exportaciones ya no pueden crecer más porque la crisis económica afecta a sus mercados en los países más ricos. Para Foxconn, el problema es asegurarse la mano de obra. Como la población china crece muy poco, debido a la política de un niño por familia, y la migración del campo a la ciudad se enlentece la reserva de trabajadores chinos que parecía infinita se está agotando.

"Antes solucionábamos nuestros problemas empleando más trabajadores", explicó Qin Huai Zhou, gerente de una planta de fabricación de puertas, en una entrevista televisada. "Ahora los tiempos han cambiado y nuestro problema es cómo retener a los trabajadores capacitados en la fábrica. Tenemos que pagarles más y tratarlos con más respeto".

Este cambio está llamado a tener consecuencias sobre la economía global. *The New York Times* estima que a corto plazo un encarecimiento de las manufacturas chinas alimentaría la inflación mundial. En contrapartida, *China Times* cita a Albert Keidel, investigador del think tank estadounidense Atlantic Council, quien opina lo contrario: parte de las ganancias empresariales será redistribuida a los trabajadores pero sin afectar mayormente los precios. En ambas hipótesis, las ventajas para muchas empresas de migrar hacia China pueden disiparse y con ello su capacidad de presionar hacia abajo las condiciones de trabajo y los salarios en los países de origen.

Un par de días de huelga en una fábrica de cerraduras pueden haber abierto una nueva era para cientos de millones de trabajadores en todo el mundo. ■

El “combate contra las drogas” no deja hasta ahora más que un reguero de muertos, sociedades militarizadas y el fetiche del dinero –corrupción-ensalzado y adorado. Las críticas y los cuestionamientos ante este modelo ganan espacio: tres ex presidentes latinoamericanos insistieron en febrero pasado en un cambio de paradigma. Las premisas de una alternativa a la política prohibicionista se están diseñando cada vez más en el nivel internacional.

La prohibición no alcanza una meta importante: mermar el consumo de droga. Ante esta constatación, en los cuatro puntos cardinales del planeta se elevan voces de escritores, políticos, economistas, embajadores y médicos que denuncian el fracaso de la política de represión contra las drogas. Esta propuesta de alternativa tuvo aun más resonancia en febrero de 2009, cuando los ex presidentes latinoamericanos Fernando Henrique Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia) y Ernesto Zedillo (Méjico) pidieron la legalización de la tenencia de la marihuana para uso personal. El hecho se presentó en el marco de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. (Ver cuadro.)

La legalización regulada habrá de consistir en autorizar el consumo y la venta de drogas mediante el imperio de una autoridad internacional, controlando, además, la producción y la distribución de aquélla. El doctor Pierre Charasse sugiere, por su parte, “decretar una moratoria inmediata, lanzar una conferencia de revisión de los convenios, exigir la cancelación de las listas incoherentes de sustancias y plantas prohibidas, como la cannabis o la coca, que son tan naturales como la vid o el tabaco, y crecen por todas partes. Un cambio de 180 grados permitiría poner el acento sobre políticas de salud pública de prevención y reducción de riesgos con la ayuda de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los expertos podrían proponer medidas de acompañamiento para atenuar los efectos previsibles, económicos y

Drogas: ¿hacia la legalización regulada?

Juliette Touin

financieros, de la caída de los precios y el derrumbe de la narcoeconomía”.

Las Naciones Unidas pudieran ser, según Charasse, el “foro natural” donde se abra el debate hacia un cambio de paradigma. Pero es indispensable que una legalización regulada de la droga sea compensada por políticas muy rigurosas de salud pública, para evitar un aumento del consumo, por un lado, y por el otro curar a las personas que desarrollen dependencia física.

LA LEGALIZACIÓN REGULADA CONSISTIRÁ EN AUTORIZAR EL CONSUMO Y LA VENTA DE DROGAS MEDIANTE UNA AUTORIDAD INTERNACIONAL.

Igualmente, se deberán impulsar programas de reconversión de la producción agrícola en los países productores, dirigidos a los campesinos que viven actualmente del cultivo de plantas básicas para la producción de drogas.

Controlada en parte por los Estados, éstos pudieran establecer un fuerte impuesto al consumo, tal como se hace con el alcohol y el tabaco, y cuyos recaudos se reinviertan en programas de salud pública y de educación, encaminados a crear conciencia en la población sobre sus infortunados efectos.

De legalizarse el comercio de las drogas, ya no se encontrarán las condiciones propicias para el desarrollo de una práctica ilícita, lo que, por ende, deberá provocar la involución progresiva del tráfico de aquéllas. Esto implicará una disminución de la violencia y de las muertes relacionadas con el narcotráfico. Como consecuencia, también habrá de desaparecer la confrontación entre países productores y países consumidores.

Del lado de los consumidores, bajará el número de enfermedades inherentes al consumo, así como el número de muertos por sobredosis, ya que se contará con un producto viable y más puro. Esta reorientación de políticas y esfuerzos debiera sentirse, en el mejor de los casos, en el desestímulo de fenómenos como la prostitución, la “trata de blancas” y la propia marginalización.

¿Qué efecto fuera previsible con esta reconversión del modelo represivo del consumo de psicoactivos? La escasez de estudios acerca de la importancia de la narcoeconomía dificulta la evaluación del impacto de la legalización del consumo en la economía mundial.

Según análisis del economista Luis Jorge Garay, los países productores no fueran los más afectados, toda vez que las ganancias derivadas del negocio de drogas favorecen en su gran mayoría a los países consumidores: los excedentes del narcotráfico se van al sector financiero de los países desarrollados, donde se invierten en los mercados internos de valores,

bancos, acciones, sector inmobiliario y ciertos bienes de consumo, encareciendo los precios de todos estos activos e indirectamente de otros. Se pudiera proyectar, por tanto, que la desaparición de este dinero sucio conlleve severas pérdidas en estos sectores, pero también induzca un descenso de los precios artificialmente elevados por exceso de dinero.

El caso de Colombia

Según el Monitoreo de Cultivos de Coca 2008, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Colombia es el primer exportador de cocaína del mundo, con una producción estimada en el cincuenta y uno por ciento de la producción global (430.000 toneladas). La industria de la droga cuenta también, en menor escala, con cultivos de amapola y marihuana. Pero, como se plantea en *El bazar de las cifras* (Ricardo Vargas, Transnational Institute, marzo de 2010), hay que ser muy cauteloso con aquéllos y no caer en la trampa de la manipulación de datos y diagnósticos. Si comparamos las estimaciones de la ONUDD con las presentadas por la embajada de Estados Unidos en Colombia, es evidente que no coinciden.

No es una exageración decir que la situación social, económica y política de Colombia ha sido y está afectada en extremo por la industria de la droga. Su peso es de tal nivel, que hoy se habla de “narcoparaestado”, aglutinante neologismo creado a propósito para este país, y que refleja la imbricación de tres intereses, mientras que los únicos actores que debieran manejar el Estado son los políticos, de quienes se espera siempre que sean representantes legítimos del pueblo.

Pero en el caso colombiano ellos no pueden presumir de legitimidad ni de actuar por el interés general. Propietarios, aliados o representantes directos de los dueños de la tierra, como de las grandes fortunas del país, tras la protección de sus inmensas fortunas e intocables poderes, terminaron “cruzados” con los señores de la droga, atizados a la vez por “extraños” intereses internacionales. Así, en un supuesto “todos con todos” y “todos contra todos”, el país vio y sufrió la multiplicación de la violencia y la profundización de poderes regionales y locales, que en el curso de pocos años se transformaron en poder nacional. Los casos de los presidentes Ernesto Samper y Álvaro Uribe son, cada uno con sus particularidades, expresión de esta realidad que es necesario asumir y tratar con una estrategia diferente y con otras políticas.

Ocultando su propósito sustancial, la guerra contrainsurgente, Colombia se transformó en el país prototípico del “combate contra las drogas”. Entremezclando la lucha contra las guerrillas, contra el narcotráfico y contra el consumo personal, la

Los ex presidentes y la marihuana. En su condición de líderes de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia) y Ernesto Zedillo (Méjico) propusieron en febrero de 2009 en Rio de Janeiro la despenalización de la tenencia de marihuana para consumo personal y el cambio de paradigmas en la lucha contra las drogas.

La Comisión pretende impulsar un nuevo tratamiento del problema del narcotráfico que sustituya a la ineficaz estrategia actual de guerra a los estupefacientes.

“El problema es que las actuales políticas están basadas en los prejuicios y temores y no en los resultados”, dijo Gaviria en la presentación del informe de la Comisión, que considera que la política de represión y criminalización del consumo practicada en las últimas décadas ha fallado tanto en la erradicación de las plantaciones como en el combate a las redes de distribución.

Cardoso expresó que sólo proponen la legalización de la marihuana porque es “menos dañina” y es la más extendida en los países de la región. Pedirla para todas las drogas, además, habría sido “poco realista”. (Infolatam) ■



política aplicada en el país para combatir a una u otra ha terminado por darles prioridad a la penalización y la guerra a muerte. Con las puertas abiertas para que Estados Unidos ponga en práctica todos sus diseños de control y dominio, y bajo la supuesta ofensiva contra las drogas, en una sola década se permitió la implementación del "plan Colombia" y el "plan patriota", y ahora se habilitan siete bases militares para que desde ellas opere el mayor y más potente ejército del mundo. Pese a todo ello, el narcotráfico no sólo conserva sus dominios sino que los amplía.

Esa política "antinarcóticos" tiene un inmenso costo para el país. Por ejemplo, los efectivos de sus fuerzas armadas pasaron en pocos años de 300.000 a 430.000. En 2010, el gasto militar ha crecido hasta llegar al 5,6 por ciento del PIB (sin incluir los recursos estadounidenses para el Plan Colombia), mientras en 2002 alcanzaba "apenas" al 4,6 por ciento. El resultado de la política al mando les exige una elevada erogación a los más pobres del país: desplazamientos forzados, masacres de civiles, robo de tierras, intensivas fumigaciones aéreas con químicos, contaminación de amplias áreas sembradas con productos de pancoger (cultivos que satisfacen parte de las necesidades alimenticias de una población determinada); multiplicación de enfermedades cutáneas y de otro tipo, sin valoración de su impacto para el futuro de la sociedad colombiana; contaminación de ríos; ocupaciones militares; erradicación de cultivos, sin distinción entre quienes siembran para su procesamiento en gran escala y las comunidades indígenas, que lo hacen para usos rituales y medicinales, y los campesinos pobres que tienen pequeñas parcelas en una economía de supervivencia.

Hasta hoy, la política antinarcóticos estuvo centrada en destruir unidades productoras de droga, pero el 7 de mayo de 2010, el director de la Policía, general Óscar Naranjo, en entrevista con el diario *El Tiempo* anunció "un nuevo nivel en la lucha contra el narcotráfico". La estrategia se concentra ahora en el microtráfico y las redes de distribución de los centros urbanos del país. En esta nueva etapa se pretende atacar a las bandas delictivas en las ciudades colombianas, con el propósito de hacer caer la venta de estupefacientes. De ser así, y conscientes de la ineficacia de una estrategia que, en vez de paliar, agrava el problema, se puede concluir que está en marcha una operación para legitimar la ocupación militar

urbana, tal como se llevó a cabo en zonas rurales.

¿Legalización regulada para combatir el narcotráfico?

Tres estrategias políticas se han experimentado para actuar frente al problema del narcotráfico en América Latina. La primera, plenamente vigente, una política de guerra frontal. La segunda, aplicada en México durante los gobiernos del PRI, consiste en aceptar un pacto de gobernabilidad tácito entre crimen organizado y esferas políticas. La última, que por ahora aparece como un planteamiento, propone una legalización administrada y controlada por el Estado. Suiza y Holanda ya la han puesto en práctica. Como premisa de tal medida, los ex presidentes Cardoso, Zedillo y Gaviria pidieron un "cambio de paradigma" en el combate contra la droga y la legalización de la tenencia de marihuana para uso personal, la cual se pudiera entender como un primer ensayo para ampliarla a otras sustancias psicoactivas.

SE TRATA DE LEGALIZAR PARA REDUCIR LAS GANANCIAS DE LOS GRUPOS DEDICADOS AL COMERCIO ILEGAL Y SU CAPACIDAD DE CORROMPER.

Dos de las tres estrategias son para proscribir. La primera, porque ha demostrado que causa más daño que la droga misma. Definitivamente, Colombia y México no están en condiciones de avanzar en la lucha contra el narcotráfico, so pena de altos costos en vidas humanas y seguridad. Y la segunda, porque no es imaginable dejar fructificar conscientemente el narcotráfico vía acuerdos tácitos entre un Estado y el crimen organizado. Queda la tercera, expuesta antes, que tiene argumentos pero es un salto hacia lo desconocido.

De modo especulativo, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de la legalización regulada en Colombia? Ante todo, hay que tener en cuenta que este caso es particular y aislado por la intensidad de la intromisión de los actores ilegales en el aparato estatal. Según Ricardo Vargas, el nivel de infiltración es tan avanzado y los juegos de intereses tan fuertes, que nadie va a renunciar y dejarse quitar así de fácil una actividad tan generosa. Añade que su peso y sus efectos van más allá de la cooptación del

Estado, y que su dominio se extiende a regalías en la tierra, la minería, el petróleo, en fin, a todo tipo de actividad lucrativa. "En el caso de Colombia, no hay que ponerle mucho optimismo a esa opción", concluye.

Pero, pese a los análisis de los investigadores, hay que situarse en la realidad del país, en su guerra sin perspectivas de finalización, en la multiplicación de la población adicta, cada vez más marginada y excluida, en la narcopolítica, en la corrupción que cada vez penetra más instancias, para obligarnos a considerar esta opción y la necesidad de luchar por ella.

En fin, se trata de legalizar para reducir las ganancias de los grupos dedicados al comercio ilegal de estas sustancias, y por su conducto la capacidad de corromper y destruir. A menor ganancia, menor interés por mantenerse en el negocio. Aunque el efecto de esta política, en primera instancia, recaerá en los niveles bajos y pequeños de los traficantes, hay que intentarlo. De esto son conscientes quienes se acercan a la temática. Según Garay, "la legalización regulada no tendrá un efecto directo en el narcoparamilitarismo por el hecho de que los capos que ya están enquistados y que han podido ir avanzando en su legitimación social van a seguir enquistándose, ya están en el establecimiento".

Como propuesta para combatir a los más infiltrados, el economista sugiere que el trabajo se haga simultáneamente sobre los sectores que producen todos los incentivos para la corrupción sistemática, la captura y la reconfiguración del Estado: los sectores judicial, militar, policial, político, económico y social. "Habrá que empezar por imponerles un verdadero castigo a los partidos y políticos vinculados al narcoparamilitarismo, pero, además, esto se tendría que impulsar desde la sociedad, mediante un pacto social, para cortarle raíz".

Los narcotraficantes, los carteles de Colombia y México, controlan las rutas de Estados débiles, creando riesgos para la soberanía nacional y regional. Ahora ya se encuentran en Costa Rica, Venezuela y Perú, y están llegando al África para entrar en el mercado europeo. La prohibición engendra el fenómeno del narcotráfico y su expansión. Su tratamiento es un asunto de seguridad nacional pero también internacional. El reto es básicamente uno: cambiar de paradigma para reducir su poder. ■

Este es un extracto del artículo publicado en el mensuario colombiano *Desde Abajo*, 20 de mayo-20 de junio de 2010.

Países en desarrollo reclaman en la OMC soluciones al tema del algodón.

Algunos países en desarrollo se quejaron el lunes 8 de junio en la Organización Mundial de Comercio (OMC) de la falta de progresos en la cuestión del algodón, subrayando que no puede haber una conclusión exitosa de la Ronda de Doha de negociaciones comerciales sin una solución de este tema.

La preocupación surgió durante la octava ronda de consultas sobre el tema del algodón, llevadas adelante por el director general adjunto de la OMC, Singh Harsha, en nombre del director general, Pascal Lamy.

Las diversas observaciones mostraron que no hay avances en la cuestión, con Estados Unidos, sin aceptar más rebajas a sus importantes subsidios a la producción y la exportación de algodón y simplemente repitiendo sus posiciones.

Funcionarios de comercio informaron que esta vez los países miembros formularon una serie de observaciones sobre aspectos de política comercial de la cuestión del algodón en el marco de la Agenda de Doha para el Desarrollo.

El ministro de Burkina Faso, Léonce Kone, hablando en nombre de los países del Cotton-4 (Algodón-4, Benín, Burkina Faso, Chad y Malí), lamentó que aún se esté lejos de alcanzar los objetivos fijados en la Conferencia Ministerial de Hong Kong (2005) en cuanto al tratamiento de las distorsiones en el comercio del algodón en forma "ambiciosa, rápida y específica", y añadió que el ritmo actual de las negociaciones no dejan lugar al optimismo.

Brasil se refirió a la competencia desleal que enfrentan los países en desarrollo frente a los subsidios que otorgan los países desarrollados e India expresó su decepción por la falta de progreso en las negociaciones y subrayó que si no hay una solución a este problema no puede haber una conclusión exitosa de la Ronda de Doha.

Tanzania se quejó de que ninguno de los tres aspectos de las negociaciones del algodón se ha abordado hasta la fecha y nada sustancial se ha reportado desde 2005. Reclamó la suspensión de las subvenciones al algodón y señalando que la asistencia técnica y creación de capacidad sin la reducción de los subsidios no conduce a ninguna parte.

China dijo que las negociaciones de fondo están bloqueadas y que no habrá Agenda de Doha para el Desarrollo a menos que se resuelva el problema del algodón, una posición que según funcionarios de comercio fue compartida también por Argentina. (9/6/2010 ■

SUNS es una fuente única de información y análisis sobre temas de desarrollo internacional, con especial énfasis en las negociaciones Norte-Sur y Sur-Sur. El servicio en inglés está disponible para suscriptores en: <http://www.sunsonline.org>

La reunión de Bonn deja una buena noticia: la restauración de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático como el lugar de negociación de un acuerdo internacional sobre el clima. Y si bien la traumática y caótica Conferencia de Copenhague sigue arrojando una incómoda sombra, todos los países hablaron de manera amistosa pese a sus discrepancias.

¿La razón de esta buena noticia? El Acuerdo de Copenhague, surgido de una reunión de un pequeño grupo de países sin legitimidad ni consenso, ha sido integrado ahora en un nuevo texto –elaborado por el presidente del grupo de trabajo especial sobre la cooperación a largo plazo– para facilitar las negociaciones, dando continuidad al Plan de Acción de Bali.

La mala noticia es que persisten las diferencias. El Acuerdo de Copenhague es el principal responsable por tres motivos.

En primer lugar, porque incorporó un débil sistema de “promesas nacionales” por el cual los países desarrollados sólo harían una reducción voluntaria de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esto se contrapone con el criterio “de arriba hacia abajo” en el cual se traza un objetivo general acorde a las exigencias científicas –como una reducción del cuarenta por ciento para 2020, comparado con los niveles de 1990– y luego cada país establece sus compromisos, que totalizan el objetivo general.

Estos dos criterios opuestos están en el texto como opciones alternativas y los países se enfrentaron en Bonn en torno a cuál sería preferible.

En segundo lugar, quedó en evidencia que tuvieron razón quienes criticaron el débil sistema de promesas y anunciaron que daría muy pocos resultados. Los científicos han demostrado que las promesas realizadas en el marco del Acuerdo son “increíblemente insuficientes”. En el peor escenario, las emisiones de los países desarrollados podrían aumentar 6,5 por ciento para 2020, comparado con 1990, y en el

El clima mejora en Bonn

Martin Khor

mejor, podrían disminuir 15,6 por ciento, comparado con el porcentaje requerido de veinticinco a cuarenta por ciento.

Las promesas realizadas en el marco del Acuerdo de Copenhague han puesto al mundo en un curso suicida en la medida en que la temperatura media tendría un aumento catastrófico de tres a cuatro grados centígrados para ese año. Esto contradice el propio objetivo del Acuerdo de un aumento de dos grados.

**EL ACUERDO DE
COPENHAGUE HA SIDO
INTEGRADO EN UN NUEVO
TEXTO PARA FACILITAR
LAS NEGOCIACIONES.**

En tercer lugar, el Acuerdo de Copenhague estimuló el plan de los países desarrollados de prescindir del Protocolo de Kioto, que tenía carácter jurídicamente vinculante y en el marco del cual han transcurrido las negociaciones para obligar a los países desarrollados –excepto Estados Unidos, que no es miembro– a establecer los compromisos requeridos y comparables de reducción de emisiones. Ahora, los países desarrollados intentan reemplazarlo con un nuevo acuerdo voluntario por el cual sólo prometen hacer lo que puedan.

Los negociadores de los países en desarrollo han tratado de revertir

la situación argumentando a favor del criterio “de arriba hacia abajo” para fijar un objetivo general para los países desarrollados, unido a que cada país establezca un compromiso comparable, todo de acuerdo con los requerimientos científicos. Indicaron, además, que estaban dispuestos a adoptar sus propias medidas de mitigación, pero que los países desarrollados debían apoyarlos con transferencias financieras y de tecnología.

La primera semana de junio hubo una nueva fase en la titánica batalla. En el grupo sobre la extensión del Protocolo de Kioto, los países en desarrollo insistieron en una cifra global de cuarenta a cincuenta por ciento de reducción de emisiones de parte de los países desarrollados para 2020 (comparado con 1990). Pero este criterio “de arriba hacia abajo” fue resistido por los países desarrollados –con la posible excepción de los países europeos–, aun cuando previamente lo habían acordado.

La misma resistencia se dio en el grupo sobre la cooperación a largo plazo. Allí el liderazgo lo asumió Estados Unidos –apoyado por Japón, Australia, Rusia y Canadá–, para que los países desarrollados presentaran sólo promesas nacionales de carácter voluntario.

Al mismo tiempo presionaron para que los países en desarrollo también se comprometieran con medidas de mitigación, que quedarían sujetas a sistemas de monitoreo, información y verificación internacional, si son financiadas internacionalmente, o a un sistema de consulta y análisis internacional

cada dos años, aun si las medidas no son financiadas.

Los países desarrollados también han estado utilizando la “zanahoria” de la promesa de fondos, pero los montos siguen siendo irrisorios. Y no responden si se trata de fondos “nuevos y adicionales” o simplemente de los existentes presentados de manera diferente.

Algo positivo sería el avance en la exigencia de los países en desarrollo de que se cree un nuevo fondo dentro de la Convención. Pero todavía falta trabajar en detalles importantes, como dónde se ubicará, cómo se controlará y las fuentes y cantidades de los fondos.

En materia de transferencia de tecnología, el texto sobre la creación de un “mecanismo tecnológico” es muy débil. Resulta claro que los países desarrollados no quieren cooperar realmente más allá de las ventas comerciales de tecnología y equipos. Pero los países en desarrollo están procurando que se cree un órgano con la potestad de elaborar políticas en materia de tecnología y que opere dentro de la Convención, que increíblemente todavía no existe y es resistido por algunos países desarrollados.

Todas estas diferencias se debaten a la hora de la redacción de un texto en el que los países esperan avanzar antes de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tendrá lugar en diciembre en Cancún.

Un nuevo borrador del presidente del grupo de trabajo especial debe ser el catalizador de otra ronda de discusiones. Los negociadores esperan ansiosamente ver si se han tomado en cuenta sus argumentos y si se introdujeron nuevas opciones y enmiendas en el lenguaje. Esta ronda de conversaciones finalizará este viernes. ■

Martin Khor, fundador de Third World Network (TWN), es director ejecutivo de South Centre, una organización de países en desarrollo con sede en Ginebra. Traducción: Raquel Núñez Mutter.

AGENDA GLOBAL

Redactor responsable: Roberto Bissio. **Redactor asociado:** Marcelo Pereira. **Editor:** Alejandro Gómez. (c) Instituto del Tercer Mundo (ITeM). El ITeM es una organización sin fines de lucro, no gubernamental y políticamente independiente con sede en Montevideo, que representa en América Latina a Third World Network (TWN), una red de organizaciones y personas que expresa en los foros globales puntos de vista de la sociedad civil del Sur. www.item.org.uy / item@item.org.uy

